

XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

Actuación política de la Sociedad Rural Argentina en el período 1973-1983. La relación con el gobierno peronista y el impulso al golpe de estado.

Sanz Cerbino, Gonzalo.

Cita:

Sanz Cerbino, Gonzalo (2009). *Actuación política de la Sociedad Rural Argentina en el período 1973-1983. La relación con el gobierno peronista y el impulso al golpe de estado*. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-008/1204>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/ehyf/VUe>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Actuación política de la Sociedad Rural Argentina en el período 1973-1983. La relación con el gobierno peronista y el impulso al golpe de estado

Gonzalo Sanz Cerbino

Para explicar la naturaleza y las causas del golpe de estado de 1976 en la Argentina debemos retrotraernos a la primera mitad de la década del '50. Desde ese momento el país comienza una etapa de inestabilidad política y económica, correctamente caracterizado por algunos autores como crisis hegemónica¹. Un elemento central de esta crisis son los enfrentamientos interburgueses. Estos enfrentamientos se expresaron en la disputa entre dos alianzas, dirigidas por distintas fracciones de la burguesía, cada una de las cuales intentaba imponer su salida a la crisis hegemónica. Este enfrentamiento no pudo resolverse en los 20 años que van de 1955 a 1976. La alianza que expresaba los intereses de la burguesía más concentrada tenía un programa que implicaba abrir un proceso de expropiación de las fracciones más débiles de la burguesía, de la pequeña burguesía y de la clase obrera, desatando un proceso de concentración y centralización que relanzara la acumulación de capital en el país. Este programa encontró un freno en la estructuración de una “alianza defensiva”, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por el programa liberal. Esto llevó a una situación de “empate” en medio de una crisis que se profundizaba con el correr del tiempo.

El año 1969 marca un hito en el proceso, ya que aparece allí, incipientemente, una tercera alianza integrada por el proletariado y la pequeño-burguesía, que actúan con independencia de las distintas fracciones de la clase dominante². La profundización de la crisis política y económica, la incapacidad de la burguesía para dar una salida y los

¹O'Donnell, G.: *Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976*, CEDES, Documento de trabajo N° 5, Buenos Aires, 1976; Portantiero, J. C.: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina”, en Braun, O.: *El capitalismo argentino en crisis*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.

²Balvé, B. y Balvé, B.: *El '69. Huelga política de masas*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005; Marín, J. C.: *Los hechos armados. Un ejercicio posible*, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003.

ataques hacia las clases dominadas fueron minando los lazos ideológicos que hacen posible la dominación de clase. Los cuestionamientos al conjunto de la sociedad capitalista se van haciendo cada vez más fuertes, y es en este contexto que se gestó esta tercera alianza o fuerza social, que desde 1969 comienza a atacar objetivamente las bases de la dominación social de la burguesía. Estas fracciones comenzaron a romper paulatinamente con la estrategia reformista, característica de la clase obrera hasta ese momento. Esto se expresó en la apertura de un ciclo de insurrecciones y en el crecimiento de las tendencias de izquierda revolucionaria, a nivel sindical y político. Por estas razones, estaríamos ante la apertura de un proceso revolucionario. A medida que la crisis se profundizaba, las divisiones en el seno de la burguesía tendieron a resolverse por la vía de la confluencia en la alianza contrarrevolucionaria que promovió el golpe. Hacia 1975, las divisiones en la clase dominante tienden a desdibujarse, empujadas por el peligro común que enfrentaban: la alianza revolucionaria.

Varios autores coinciden en señalar a la burguesía rural como parte de esta alianza que impulsó el golpe³. Sin embargo, nadie se ha ocupado de reconstruir la génesis de la alianza contrarrevolucionaria, sus componentes, las diferencias y disputas en su interior y con la alianza reformista. La bibliografía específica sobre la burguesía rural se ocupa del enfrentamiento con el gobierno y su apoyo al gobierno surgido del golpe de marzo del '76. Sin embargo, al quedarse en el plano discursivo, no pueden ver las diferencias tácticas existentes entre las diferentes corporaciones de la burguesía. Un ejemplo claro son los casos de CARBAP y SRA, analizados en los trabajos de Mirta Palomino⁴. Analizando solamente sus pronunciamientos nos encontramos con dos corporaciones que se enfrentan al gobierno peronista en los mismos términos y con los mismos reclamos: el intervencionismo estatal, el monopolio de la comercialización y los bajos precios pagados a los productores agrarios. Ambas corporaciones, asumiendo posiciones claramente liberales, se oponen a un gobierno que perciben como “estatista”. Ambas apoyaran al gobierno surgido del golpe, ya que su “filosofía” coincide con la de estas entidades. Si cabe alguna diferencia entre ellas, es apenas de grado y no de fondo. Sin embargo, cuando superamos el nivel discursivo y nos adentramos en las acciones emprendidas por estas organizaciones vemos diferencias más profundas que no llegan a

³Sidicaro, R.: *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002; Palomino, M.: *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, CISEA, Buenos Aires, 1988; Palomino, M.: *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*, CISEA, Buenos Aires, 1989; O'Donnell, G.: *Catacumbas*, Prometeo, Buenos Aires, 2008.

⁴Palomino, *Tradición y Poder...*, op. cit.; Palomino, *Organizaciones corporativas...*, op. cit.

percibirse en el discurso. Por otro lado, este plano discursivo no permite entrever diferencias sustanciales entre la oposición a todos los gobiernos “estatistas” del período 1955-1973 y el apoyo a los gobiernos liberales, que se expresaron en mayor o menor medida con cada golpe de estado. Así, no habría ningún tipo de diferencia entre el impulso a los golpes del '62, del '66 o del '76. Sin embargo, cuando hacemos foco más allá del discurso, nos encontramos con que la acción político-gremial de estas corporaciones en el período 1973-1976 supera ampliamente todo lo visto anteriormente. El recurso a la acción directa y los intentos de desestabilizar al gobierno mediante la movilización de los productores agrarios aparecen como un elemento novedoso, que podría explicarse porque a diferencia de coyunturas anteriores, aquí estaba en juego la continuidad de las relaciones sociales capitalistas.

En esta ponencia avanzaremos sobre las acciones gremiales de la burguesía agraria en el primer tercio del año más conflictivo, 1975, poniendo especial énfasis en la actuación de una de las corporaciones agrarias más importantes, la Sociedad Rural Argentina. Esta forma de encarar el problema nos permitirá acercarnos al problema de la reconstrucción de la génesis, el desarrollo y las acciones de la fuerza social contrarrevolucionaria, un elemento fundamental para comprender las causas de la derrota de su antagonista, la alianza revolucionaria.

La Sociedad Rural Argentina contra el gobierno peronista

A pesar de la conflictiva relación entre la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el peronismo en los años previos a su retorno al gobierno, la entidad se mostró diplomática hacia las nuevas autoridades surgidas de las elecciones de marzo de 1973. A diferencia de CARBAP, la SRA firmó el acta de compromiso entre los productores agropecuarios y la Secretaría de Agricultura en septiembre de 1973, que suscribía la creación de una comisión en donde se discutirían las medidas para el sector. Sin embargo, ese apoyo no fue brindado sin reservas.

Las diferencias pronto comenzarán a profundizarse. Dentro del gobierno, las críticas se dirigieron en particular hacia el equipo que el Ministro de Economía Gelbard había puesto al frente de la Secretaría de Agricultura, encabezado por Horacio Giberti. Desde allí se había impulsado un paquete de medidas que provocó el rechazo de la entidad. Entre las más cuestionadas se encontraban las leyes sobre la comercialización de granos y carnes (N° 20.573 y 20.535), que establecían distintos grados de regulación estatal a

través de la Junta Nacional de Carnes (JNC) y de la Junta Nacional de Granos (JNG). En el caso de las carnes se regulaba el comercio exterior, estableciendo precios máximos inferiores a su cotización internacional. En el caso de los granos, se establecía el monopolio estatal y la fijación de precios para el comercio interior y exterior. Estas leyes fueron rápidamente sancionadas por el Poder Legislativo y estuvieron vigentes hasta 1976⁵.

Distinto fue el caso de la Ley N° 20.538, que establecía un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ya que fue sancionada pero no llegó a aplicarse. Sin embargo, la medida también motivó reclamos de la SRA. También recibió fuertes cuestionamientos el proyecto de Ley Agraria, que preveía, entre otras medidas, la expropiación de las tierras improductivas a través de distintos mecanismos⁶. Por esta razón fue visto como una amenaza a la propiedad de la tierra y como un intento indirecto de introducir una reforma agraria.

A lo largo de 1973 y 1974 las críticas a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura fueron profundizándose. A menos de un año de asumir las nuevas autoridades, las críticas abarcaban el conjunto de la política agraria:

“la conducción agropecuaria hizo poco caso a la opinión de los productores, persiguiendo una política no compartida por las entidades del sector. Se asignó especial importancia a la renta neta potencial. Se han quitado alicientes al agro, se han comprimido sus ingresos y se los ha amenazado en su base jurídica a través de proyectos que cuestionan el derecho de propiedad”⁷.

Al igual que CARBAP en ese mismo período⁸, comenzaron a vincular a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura con “intereses ajenos al sentir nacional” y con la “subversión”:

“quienes tienen a su cargo la conducción del país [deben] proceder con prudencia, sin dejarse llevar por programas extraños a la realidad, que acaban por postrar el progreso económico, como lo prueban los ejemplos de algunos países que adoptaron regímenes socialistas para explotar la tierra”⁹.

⁵Makler, C.: “Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974)”, en Graciano y Gutiérrez (dir.): *El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000*, Prometeo, Bs. As., 2006; Lattuada, M.: *La política agraria peronista (1943-1983)*, CEAL, Buenos Aires, 1986.

⁶Ibidem.

⁷Memoria 1973. Todas las citas de las Memorias de SRA en este acápite fueron tomadas de Palomino, *Tradición y Poder...*, op. cit., salvo indicación en contrario.

⁸Ver Sanz Cerbino, G.: “Los Golpistas. Las acciones de CARBAP, antes y después del golpe de 1976”, V Jornadas de Sociología UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 10 al 12 de diciembre de 2009.

Además de acusarlo de responder a “ideologías extrañas”, Giberti fue acusado en reiteradas ocasiones de “desconocer la problemática del agro”. Por esta razón, la SRA saludó su alejamiento del cargo en octubre de 1974. Sin embargo, y a pesar de notorios cambios en los lineamientos políticos para el área, con la paralización de las medidas más controvertidas de esa etapa, la tregua de la SRA duró poco. A comienzos del año 1975 caracterizaba a la situación en los siguientes términos:

“la falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe claridad de objetivos. Un sistema económico equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal ha demostrado su fracaso, ha llevado al empobrecimiento general y a una inflación nunca vivida, que llevan a la descomposición económico-social. Continuamos en el camino de la desorientación, inseguridad y desorden”¹⁰.

Vemos aquí que los ejes de la crítica al gobierno en la nueva etapa han cambiado. Ya no se pone énfasis en las amenazas a la propiedad de la tierra y ahora el problema pasaba a ser, por un lado, la política de precios agrarios, regulados por el estado a través de la JNC y de la JNG. A eso se refieren cuando critican el “intervencionismo estatal”. Por otro lado, comienza a aparecer una preocupación que excede los reclamos económicos: la crítica a la situación de inseguridad y desorden, provocada por la “subversión”.

El cambio en el eje de su discurso contra el gobierno fue de la mano con el paso a la acción. Durante 1975 la SRA participó, junto a otras organizaciones, de movilizaciones y paros comerciales para enfrentar la política del gobierno. Hacia fines de 1975 la SRA se incorpora plenamente a la ofensiva de la burguesía en pos de un recambio gubernamental. En agosto se integra a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que reunía a las corporaciones más importantes de la burguesía más concentrada. La solicitada en la que dieron a conocer la creación de la entidad, de agosto de 1975, tiene tintes claramente golpistas:

“La Nación está atravesando una de las más graves crisis de su historia, que alcanza tanto al ámbito político como al económico y social [...] Son pocos quienes han tomado conciencia de la urgente necesidad de corregir rumbos y abandonar cursos de acción que conducen a una perspectiva catastrófica. Los compromisos políticos suelen postergar las soluciones más acertadas, pero ni siquiera este

⁹Memoria 1973.

¹⁰Memoria 1975.

argumento, mezquino frente a la realidad que vive el país, puede justificar la insistencia oficial en actualizar las mismas argucias y recetas que han motivado reducción del nivel de vida de la población; inflación desenfrenada; desabastecimiento; virtual cesación de pagos en el sector externo; quiebra empresaria; desocupación; paralización de la inversión y, sobre todo, una gangrena corruptiva que invade todas las expresiones de la relación social argentina.”¹¹

En una reunión que mantuvo con el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en noviembre de 1975, la entidad manifestó su preocupación por el avance de la “subversión”, al que no dudó en relacionar con la política agraria del gobierno:

“La baja rentabilidad al productor [...] constituye un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de concepciones extremistas; existen constancias de penetración subversiva a nivel de los productores medianos y pequeños, a través de entidades que constituyen ramas políticas del extremismo colectivista”¹².

El enemigo mayor, la “subversión”, si no brotaba del propio gobierno, por lo menos no era enfrentado decididamente desde allí:

“La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos”¹³.

Un balance posterior al golpe del '76 da una imagen más clara de la caracterización que hacía la SRA de la situación y cuál era la solución propuesta:

“Durante el período 75-76 el país presenció posiblemente su más grande convulsión social, política y económica desde la época de la Organización Nacional. Estos trastornos, consecuencia de un régimen demagógico y populista, llevaron al país casi al borde de su disolución, desgracia que pudo ser evitada debido a la intervención militar del 24 de marzo, destinada fundamentalmente a reencausar el país en el camino de la ley, de la responsabilidad, de la verdad [...] El problema en su esencia fue la ausencia de autoridad. La intervención militar del 24 de marzo puso término a tanto desgobierno, abriendo la posibilidad de una firme recuperación moral y económica del país, al amparo del derecho y del respeto a las libertades fundamentales del hombre.”¹⁴

¹¹*La Nación*, 14/8/75, citado en Sidicaro, op. cit.

¹²*Memoria* 1976.

¹³*Memoria* 1976.

¹⁴*Memoria* 1976.

Una vez consumado el golpe SRA expresó su apoyo en declaraciones públicas, con la incorporación de funcionarios a cargos de gobierno y con su respaldo en coyunturas difíciles, como con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹⁵. Sin embargo, este recorrido por los posicionamientos públicos de la SRA a lo largo del período no alcanza para reconstruir su estrategia. La estructuración de una alianza contrarrevolucionaria, las luchas en su interior para imponer la estrategia más adecuada a sus fines, la disputa con la alianza reformista para erosionar sus bases de apoyo y lograr el encolumnamiento de distintas fracciones detrás de ese programa sólo puede reconstruirse a través de las acciones concretas emprendidas por la SRA y por el conjunto de la burguesía. En el siguiente acápite presentaremos algunos avances de investigación que van en ese sentido. Allí reseñaremos la acción política de la burguesía agraria y de las corporaciones que representan sus intereses en el primer tercio del año 1975. Tomaremos como fuente el diario *La Nación*, uno de los medios que mejor refleja los intereses de este sector social.

Acción política de la burguesía agraria, enero-abril de 1975

La reconstrucción de las protestas de la burguesía rural en los primeros cuatro meses de 1975 arroja un panorama mucho más complejo de lo que se conocía. Los paros y el recurso a la acción directa aparecen regularmente, no sólo en las medidas de alcance nacional, sino en una gran cantidad de acciones regionales y provinciales. El principal reclamo pasa, en este período, por el defasaje entre los precios fijados por los organismos estatales y los costos que aumentan diariamente en un contexto altamente inflacionario.

El año comenzó con una declaración de CARBAP, emitida el 27 de diciembre de 1974, en la que se recomendaba a los productores no realizar más compras de insumos que las necesarias y no recurrir a la financiación bancaria a menos que resulte absolutamente imprescindible. La inquietud partía del aumento de los costos que no se podía sostener con los precios fijados para los productos agrarios¹⁶.

En ese contexto, toda la expectativa se concentra en la reunión programada para el martes 7 de enero entre el Comité de Acción Agropecuaria (CAA), un frente de reciente constitución integrado por Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales

¹⁵Palomino, *Tradición y Poder...*, op. cit., p. 160.

¹⁶*La Nación*, 4/1/75. En adelante, *LN*.

Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), y el Ministro de Economía. Como resultado de la reunión se informó que el gobierno reajustaría “a la brevedad” los precios de la hacienda “a fin de dar mayor productividad a los productores”. También se informó que ese año no se aplicaría el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que sería reemplazado por el “impuesto de emergencia” que rigió el año anterior¹⁷.

Sin embargo, las promesas no fueron bien recibidas por las entidades. Luego de la reunión con las autoridades, CARBAP emitió un comunicado dirigido a sus afiliados que sostenía:

“sobre la base de promesas, se pretende consolidar la enorme frustración que soporta el campo y que pronto gravitará en todo el país. Sepan entonces los productores agropecuarios que sólo les esperan más trabajo, más sacrificios económicos y una intensa campaña de esclarecimiento y de acción gremial en defensa de sus justos derechos y en busca de la justicia económica que el campo merece”¹⁸

En otros sectores del agro se perciben las mismas tensiones. Los productores frutícolas de Neuquén resolvieron la adopción de medidas de fuerza a partir del lunes 13 de enero, “por el incumplimiento de los precios mínimos para la cosecha de manzanas del año último”. El paro se efectivizó con cortes de ruta, y el plan de lucha contemplaba un nuevo paro por 48 horas y otro por tiempo indeterminado de no obtener respuesta satisfactoria a sus demandas¹⁹.

También en las filas de la Federación Agraria Argentina (FAA) existía inquietud. Durante esa semana se efectuaron reuniones zonales en las que se discutió suspender la entrega de hacienda por 15 días, disconformes con los recientes anuncios oficiales sobre la eliminación de gravámenes y la concesión de reembolsos para la carne²⁰.

El miércoles 15 de enero el gobierno realiza un nuevo anuncio: se dan a conocer los nuevos precios máximos para la carne. Casi inmediatamente, CRA emite un comunicado señalando que los precios no satisfacen a los productores. Un día después lo harán CARBAP y CARCLO, pertenecientes a CRA. Sin embargo, la reunión del CAA no llega a acordar una posición común sobre el problema y posterga su pronunciamiento por una semana.

¹⁷LN, 8/1/75.

¹⁸LN, 11/1/75.

¹⁹LN, 13 y 14/1/75.

²⁰LN, 12/1/75.

El sábado 18 de enero CARBAP realizó seis asambleas zonales para discutir el plan de acción frente a la situación del agro. La asamblea de Bahía Blanca fue presidida por Jorge Aguado, quien señaló que los productores debían ser más categóricos en defensa de sus intereses y que corresponde aplicar un estado de alerta económico agropecuario en todo el país. La asamblea expresó su apoyo al plan de acción que dispongan CARBAP y CRA. Al término de la reunión, la entidad dio a conocer una declaración que disponía la movilización a las municipalidades de la zona sudoeste para solicitar que no se modifiquen los montos impositivos del año anterior, y en el caso de la producción lanera, que los montos disminuyan “sustancialmente”²¹.

El mismo sábado 18 una reunión de productores de Chaco y Santa Fe resolvió no entregar girasol a la JNG, en reclamo por la fijación de precios excesivamente inferiores al precio de producción. De la reunión participaron delegados de Unión de Cooperativas Agrícolas Limitadas (UCAL), Asociación de Cooperativas Algodoneras (ACA), Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), pertenecientes a CONINAGRO, junto a delegados de la FAA, Federación Económica y las Ligas Agrarias de Chaco y Formosa²². Durante esa semana la medida de fuerza se garantizó recurriendo a la acción directa:

“Las rutas están desiertas y los camiones detenidos y vacíos no solamente en los pueblos y en las chacras, sino en la vera de las rutas, ante el temor de que hayan arrojado clavos ‘miguelitos’ o que haya represalias [...] En la localidad de Tres Isletas, un camión Fiat 619 [...] cargado con girasol, fue incendiado y las pérdidas se estimaron en la suma de 240.000 pesos. Versiones de distintas fuentes indican que por lo menos otros tres vehículos sufrieron daños”²³

En apoyo a la medida de fuerza, los comerciantes de la región realizaron un apagón. Mientras tanto, en Mendoza se desarrolló una protesta con cortes de ruta de productores frutícolas reclamando mejores precios para la cosecha de manzanas y que se garantice la rentabilidad de sus explotaciones²⁴.

El jueves 23 dirigentes de la FAA se reunieron con el Ministro de Economía. El principal reclamo fue por el precio de la carne. También reclamaron por los precios de oleaginosas, leche, frutas y lana. Al término de la reunión, el presidente de la FAA, Humberto Volando, expresó su disconformidad: “en general no salimos satisfechos de

²¹LN, 19 y 20/1/75.

²²LN, 19 y 21/1/75.

²³LN, 24/1/75.

²⁴LN, 22/1/75.

la reunión y ahora nos mantendremos a la expectativa por los resultados que puedan surgir”²⁵.

El jueves 30 de enero comenzaron a circular rumores sobre la realización de un paro comercial ganadero entre el 1 y el 16 de febrero. El Ministerio de Economía difundió un comunicado en donde advertía a los productores que se les aplicaría la Ley de Abastecimiento y la Ley de Seguridad Nacional. FAA sostuvo que ellos no convocaron, pero que eso “no implica que las entidades que coordinaron la medida de fuerza no cuenten con su amplio apoyo y solidaridad”. En un comunicado difundido el miércoles 29 FAA reconoció que la decisión de ir al paro había sido tomada por algunas de sus entidades de base (entre ellas, Agricultores Federados Argentinos -AFA-) y con autonomía de su dirección. Las entidades que conforman el CAA señalaron que a pesar de los momentos difíciles que sufren los productores, ellos no avalaban ni participaban de la medida²⁶.

El sábado primero de febrero se realizó una asamblea general de AFA, a la cual asistió el presidente de FAA. Allí se confirmó el paro comercial ganadero por 15 días motivado en la falta de respuesta a los reclamos y en la “desastrosa situación de las pequeñas y medianas explotaciones de todo el país”²⁷. El presidente de FAA afirmó que estaban en un “momento de lucha”, donde no caben “las dudas ni la cobardía”, donde no se podía mirar hacia atrás para ver cuantos eran los que seguían a los abanderados, sino que había que marchar aún siendo pocos. “Luego vendrán los otros, y con el tiempo, el país agradecerá esta actitud. Es hora de pocas palabras y muchos hechos”²⁸.

El martes 4, SRA condena la acción en un comunicado. Sostiene que, a pesar de la grave situación que atraviesa el agro, las entidades del CAA buscaron siempre hacer efectiva la defensa del sector en formas compatibles “con el orden y el respeto institucional”, y que esperan que la acción del gobierno haga innecesario aconsejar “medidas extremas que, aunque algunas veces resultan efectivas, pueden causar trastornos y deterioros en el orden individual o en el colectivo”²⁹.

Un comunicado de la FAA del miércoles 5 señala que “la suspensión de envíos se efectúa según lo previsto”. Señala también que se han registrado disminuciones en las entradas de animales de aproximadamente un 90% en Chaco, un 75% en Córdoba y

²⁵LN, 24/1/75.

²⁶LN, 31/1/75 y 1/2/75.

²⁷LN, 2/2/75.

²⁸LN, 4/2/75.

²⁹LN, 5/2/75.

Santa Fe, y de un 40% en Buenos Aires y La Pampa³⁰. Los últimos días del paro se registraron amenazas para que los productores no boicoteen la medida llevando sus animales al mercado y la policía realizó operativos para evitar la violencia³¹. El balance de las entidades convocantes señaló que “si bien [el paro] no adquirió relevancia, provocó algunas perturbaciones en algunos partidos de Córdoba y Santa Fe”³².

El gobierno respondió a las presiones concediendo algunos de los reclamos. El 31 de enero el Ministerio de Economía fijó un nuevo precio para el girasol, en un intento por destrabar el conflicto en Chaco y Santa Fe. El martes 4 de febrero anunció el aumento de los montos destinados a créditos para el sector rural y la baja de los intereses.

Sin embargo, los conflictos seguían estallando por todos lados. El lunes 10 de febrero la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz realizó una asamblea extraordinaria para tratar la crisis del sector lanero. Allí se señaló que “se agotó el diálogo”, y se votaron una serie de medidas de fuerza, como el no pago de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. También se aprobaron otras medidas, a tomarse “si las circunstancias lo indican”: “cierre de la ruta N° 3, con la clausura de los puentes sobre los ríos Deseado, Santa Cruz y Gallegos; cierre de comercios, toma de aeródromos y hasta el gasoducto que conduce el fluido al norte del país”³³

El lunes 17 los productores laneros de Santa Cruz hicieron efectiva la amenaza con un paro de actividades por 24 horas, y dispusieron el bloqueo de la ruta nacional N° 3 en varios puntos y del aeropuerto local. Las cooperativas agrarias y la Cámara de Comercio manifestaron su apoyo. Se detuvo a seis manifestantes en un corte sobre el Puente Piedrabuena. El martes 18 continuaron las detenciones: 27 personas fueron arrestadas, casi todas en sus domicilios, por los cortes de la ruta 3 y de la ruta provincial 521 del día anterior. Entre ellos se encontraban el presidente y el vicepresidente de la Federación de Instituciones Agrarias de Santa Cruz, y el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural de Puerto San Julián³⁴. Un día después, el gobierno anunciaba el aumento temporal de los reembolsos a la exportación de lanas.

El 18 de febrero los productores frutícolas de Río Negro y Neuquén realizaron un paro comercial por 24 horas, y convocaron a una concentración de productores y acto en la rotonda de Cipolletti ese mismo día. Entre otras entidades, convocaron la FACA y la

³⁰LN, 6/2/75.

³¹LN, 18/2/75.

³²LN, 27/2/75.

³³LN, 11/2/75.

³⁴LN, 19/2/75.

CGE de Río Negro y Neuquén. Los productores viñateros de San Juan también amenazaron con ir a un paro con cortes de ruta si no se daba respuesta a sus demandas antes del lunes siguiente. La medida se resolvió en una asamblea que reunió a 600 personas el martes 18 de febrero.

El sábado 22 de febrero se reunió en Coronel Brandsen una asamblea nacional convocada por el Comité de Defensa de la Producción Lechera (CODEPROLE). Fue presidida por el delegado de la SRA, Guillermo Alchourron, y asistieron representantes de CRA y la Unión General de Tamberos. Se decidió suspender las entregas de leche del 12 al 17 de marzo, exigiendo un mejor precio. Ese mismo día se realizó una reunión de productores pertenecientes a la Federación de Centros Tamberos de Santa Fe. Pidieron el ajuste del precio al nivel establecido en el convenio firmado en diciembre que esperaba la homologación y convocaron a un paro para el 26 y el 27 de febrero ante la falta de respuestas. La medida fue impulsada también por la Coordinadora Nacional de Ligas y Movimientos Agrarios, y afectó a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Formosa. En Córdoba la organización convocante era la Federación de Ligas Tamberas, y allí las principales plantas procesadoras no recibieron el producto. En esa provincia se produjo la detención de cinco personas que interceptaron un camión que se disponía a ingresar a la planta de Sancor, y volcaron su contenido en la ruta. La Federación de Centros Tamberos de Santa Fe, que había convocado al paro, lo levantó a última hora del martes frente al anuncio de homologación del convenio de diciembre³⁵. Finalmente, el CODEPROLE anunció la suspensión del paro programado para el 12 de marzo. No se explicitaron los motivos, pero sí que continuarían con las gestiones para lograr un aumento del precio de la leche y la convocatoria a una asamblea para el 5 de abril³⁶.

El 28 de febrero se realizaron las cinco asambleas convocadas por el CAA, con una presencia “multitudinaria de productores de todos los puntos del país”. Allí se dispuso, “por aclamación”, realizar un paro general de actividades comerciales agropecuarias de alcance nacional el 3 de marzo y por 24 horas. Durante ese día los productores no comprarán ni venderán productos, no realizarán operaciones bancarias ni gestiones comerciales, pero sin paralizar la actividad productiva en los establecimientos. En las exposiciones se efectuaron “agudas críticas” a la conducción económica y se

³⁵LN, 23 y 27/2/75.

³⁶LN, 8/3/75.

“reclamaron urgentes medidas para los distintos sectores que conforman la actividad agropecuaria del país”.

Según los organizadores, la actividad comercial durante la jornada fue “casi nula”, y estimaban la adhesión en un 90%. Según *La Nación*, se notó una disminución en la entrada de animales en todos los mercados, no se realizaron remates-feria y en algunos lugares los comerciantes adhirieron al paro cerrando sus comercios durante la jornada o por algunas horas. En Buenos Aires el paro no se sintió en el consumo, debido a que el abastecimiento se garantizó con los envíos de días anteriores. Se registraron incidentes que afectaron la provisión de leche, ya que “aún cuando la policía no confirmó los hechos, se supo que fueron volcados por individuos desconocidos varios camiones lecheros y en otros casos se impidió que los vehículos alzaran tarros con el producto en granjas de la zona sur”. En Santa Rosa cerraron durante todo el día “algo más de 30 comercios”, y casi todos realizaron un paro de actividades entre las 18 y las 20 horas, adhiriendo a la medida en solidaridad convocada por la Federación Económica Pampeana y por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Rosa. A su vez, señalan que no se cumplió la actividad de feria y que sólo salió un embarque de 30 novillos a mercado. En el sector transporte de hacienda y en el de tamberos el paro fue total. En General Pico la industria ligada al agro también adhirió al paro, al igual que la UCR provincial, el Movimiento Federalista Pampeano y Fuerza Federal Popular. En Córdoba la adhesión fue total, señalaron los organizadores. En Santa Fe la repercusión del paro en los grandes centros urbanos no fue visible. Sin embargo, la mayoría de los remates-feria no operaron y en los mercados de hacienda la oferta fue “reducida”, no superando las 200 cabezas.

La medida de protesta apenas opacó otros conflictos viejos y nuevos. El domingo 2 de marzo se produjo una movilización de productores vitivinícolas a la gobernación de San Juan, reclamando apoyo crediticio y mejores precios. El lunes 3 CARBAP emitió un comunicado rechazando uno de los puntos del acuerdo de la Gran Paritaria Nacional, que establecía un aporte empresario del 1,5 por mil sobre sueldos, a repartirse a partes iguales entre la CGT y la CGE. Señala que el sostenimiento material de la CGT corresponde sólo a los trabajadores, y que la CGE no representa al campo. La medida busca “consolidar materialmente y en forma compulsiva la implantación de una verdadera ‘oligarquía’ gremial empresaria que, insegura de sus propios méritos y representatividad” necesita recurrir al estado para sostenerse. En los días siguientes el

aporte será rechazado por SRA, CRA, ACA, CONINAGRO, y todas llamarán a sus afiliados a no pagar la contribución.

A la semana de concretado el paro nacional, el secretario de Comercio acusó a los productores de subvertir el orden:

“El país está en guerra. Está siendo castigado por una ola subversiva en la cual están comprendidas actitudes o métodos del sector agropecuario. Se magnifican los pedidos y hay gente que está siendo llevada erróneamente; gente que está completamente engañada”³⁷

Algunos días después la SRA respondió a las palabras del secretario de Comercio con una nota que sostiene que el último paro fue “una manera ordenada y respetuosa de expresarse, ya que los productores agropecuarios y sus entidades representativas son elementos de orden, de trabajo y de respeto por las instituciones nacionales”. Se recalcó a su vez que, por la modalidad del paro, el conjunto de la población no se vio afectada, ya que no hubo desabastecimiento. Sobre la subversión apuntó: “Nuestra entidad está tan preocupada como el Gobierno por la necesidad de terminar con ideologías y actitudes contrarias al sentir argentino y a la esencia nacional”.³⁸

A lo largo del mes de marzo comenzaron a observarse movimientos en las alianzas de las corporaciones empresarias. Por un lado, la FAA realizó una propuesta pública de unidad gremial a CRA. La respuesta de CRA no es una negativa, pero sí solicita aclaraciones: pide que la FAA defina su posición respecto a la CGE, a la que estaba afiliada, ya que de iniciarse tratativas, deberían hacerlo con esa entidad. El pedido formal esconde un pedido de posicionamiento político, ya que la CGE nucleaba a los empresarios más afines al gobierno. Por otro lado, en la misma semana se constituyó Comité de Acción Empresaria, con la presencia de CRA y SRA. El nuevo agrupamiento se constituyó para enfrentar el aporte a la CGE y a la CGT dispuesto por el gobierno, pero no descartan que pueda tener continuidad y abordar otros problemas. De hecho, podría ser considerado el antecesor de lo que luego sería APEGE.

Abril comenzó con nuevos conflictos. Durante este mes asistimos a una presión fuerte de parte de CARBAP, CRA y las entidades adheridas a ella para ir a un nuevo paro. Una reunión conjunta de la comisión de enlace de Sociedades Rurales de La Pampa y de CARBAP resolvió apoyar todas las medidas que sean dispuestas por CARBAP y CRA. En las siete reuniones zonales convocadas por CARBAP los asistentes dieron su apoyo

³⁷LN, 15/3/75.

³⁸LN, 21/3/75.

a las medidas que disponga el CAA para enfrentar la política gubernamental³⁹. Como parte de su ofensiva, CRA solicitó entrevistas a diez gobernadores para reclamar su apoyo en las gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional⁴⁰.

El 18 de abril se dio a conocer un comunicado de CRA sobre la crisis económica y la situación del campo. Señala que:

“Desde largos años atrás se ha seguido una línea económica basada en prejuicios, divorciada de la realidad, que pretende desconocer la verdadera fuente de recursos del país [...] Esta política tomó especial énfasis durante los últimos dos años, al suprimirse la existencia del mercado e impulsar un acelerado proceso de estatización de las actividades [...]

Las consecuencias de esta política errónea están claramente a la vista: desabastecimiento extremo de insumos para la producción e industria y bienes de consumo familiar; consolidación de ‘mercado negro’ [...]; agotamiento de divisas; déficit presupuestario exorbitante, emisión monetaria sin freno y, como corolario: clima de inseguridad económica, política, social y personal, provocada por la angustia general, que no beneficia a nadie, sino a los intereses disolventes.”⁴¹

A los pocos días se difundió la noticia de que CRA estaría dispuesta a convocar a un nuevo paro en mayo. CARTEZ y la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa salieron a respaldar la decisión⁴².

Por su parte el CAA remitió un telegrama a la presidenta reclamando una audiencia para discutir la “grave situación que atraviesa el agro”⁴³. Días después la presidenta respondió negativamente por encontrarse con la “agenda completa”⁴⁴. La expectativa recayó entonces sobre el Comité, esperando la respuesta al desaire presidencial. Este hecho hizo estallar las contradicciones internas del CAA. El martes 22 Jorge Aguado renunció al Comité de Acción Agropecuario, donde era representante por CRA. Los motivos aducidos fueron el no sentirse “integrado en este momento” y no compartir “modos de acción que no siento”. Hace referencia a “la falta de solidaridad de las restantes entidades [...] con el plan de acción propuesto” por CRA. Manifiesta que esa falta de solidaridad implica una “intención de demorar la toma de decisiones y llevar a la larga la acción del Comité”. En referencia a los motivos esgrimidos por SRA y CONINAGRO para no ir a un nuevo paro, señala:

³⁹LN, 14/4/75.

⁴⁰LN, 26/4/75.

⁴¹LN, 18/4/75.

⁴²LN, 21 y 22/4/75.

⁴³LN, 4/4/75.

⁴⁴LN, 19/4/75.

“¿Por qué no es el momento oportuno? ¿Para quién no es el momento oportuno: para el productor, para las entidades o para los dirigentes? ¿Los otros problemas que existen en el país se dejan afectar por la oportunidad? Creo que cuando la acción gremial es clara nunca se la debe realizar por oportunidad sino por necesidad y, por lo tanto, el momento ‘oportuno’ de la acción en defensa del campo surge de una necesidad originada en la situación de crisis que sufre el sector agropecuario y de la cual todos somos concientes.”⁴⁵

SRA se pronunció sobre la renuncia de Aguado al CAA. Dice que se debe a un problema interno de CRA, y aclara que esa entidad no descarta “ningún medio de acción en defensa de los productores, pero entiende que ello se debe considerar teniendo en cuenta la coincidencia de las tres entidades que forman el Comité, cuestión vital para el éxito de cualquier resolución que se adopte”. Criticó a su vez “la intolerancia, el apresuramiento y el afán de notoriedad”, que son “malos consejeros para el entendimiento entre las entidades”⁴⁶. CONINAGRO también se expresó con motivo del alejamiento de Aguado del CAA. Luego de condenar la actitud del dirigente de CARBAP, explicó por qué no aprobó la realización del paro que reclamaba CRA:

“Al considerar la posibilidad de resolver sobre medidas de fuerza, CONINAGRO no adoptó ninguna actitud de tipo dilatoria sino que, claramente, expresó que no consideraba oportuna su realización, fundando esta posición en la realidad presente de que hay una cosecha por levantarse, de la que el país tiene extrema necesidad en la difícil situación económica actual en que se encuentra y en el hecho cierto de que existe un estado general de intranquilidad al que en forma alguna se desea contribuir con sus manifestaciones”⁴⁷.

La editorial de la sección agro de *La Nación* del Sábado 26 de abril explica la renuncia de Aguado porque “CRA quiso imprimir actitudes más definidas y francas [al CAA], de tal manera que se constituyese en un interprete lo más aproximado posible de la voluntad de los productores nucleados en las entidades de base”⁴⁸. Señala que la continuidad del CAA está en peligro y que CRA continuará con su plan de acción a pesar de la negativa de SRA y CONINAGRO a poyarlo.

Conclusiones

⁴⁵LN, 23/4/75.

⁴⁶LN, 24/4/75.

⁴⁷LN, 25/4/75.

⁴⁸LN, 26/4/75.

De este avance de investigación sobre las acciones políticas de la burguesía agraria en los primeros meses de 1975 se desprenden algunas observaciones. En primer lugar vemos que al reconstruir las acciones de las distintas corporaciones nos encontramos con un panorama mucho más complejo de lo que permiten ver sus discursos. A pesar de partir de posiciones ideológicas similares, CARBAP y la SRA no muestran una coincidencia en sus acciones contra el gobierno. Mientras la primera se muestra decidida a redoblar la ofensiva apelando a los paros y la acción directa, la SRA se muestra más cautelosa. Por el contrario, la FAA que en su discurso se muestra afín a posiciones reformistas y coincide en muchos puntos con el gobierno, va a ser uno de los más virulentos impulsores de la acción directa contra el gobierno. Se percibe en estos primeros meses de 1975 una tendencia a la confluencia de FAA y CARBAP que se materializará tiempo después en la realización de un paro conjunto que no es apoyado por la SRA. Esto no significa que la SRA no haya apoyado el golpe, sino que aparecía menos propensa a las acción directa y a la movilización. La razón podría residir en su preferencia, en estos momentos, a una acción más conspirativa, en un cruce de opiniones con diferentes personales políticos y militares.

Por otro lado, también influyen las urgencias económicas de los afiliados a cada una de estas entidades. Mientras que FAA y CARBAP agrupan a productores chicos y medianos, casi exclusivamente agrarios, la SRA representa los intereses de la burguesía rural más concentrada y con intereses en otras ramas de la economía. Así, la SRA contaría con más recursos para afrontar la crisis, lo que le permitiría asumir posiciones más cautas.

Otra observación que se desprende del análisis de las fuentes es que las acciones de la burguesía rural durante el período son muchas más de las que se mencionan en la bibliografía específica. Se suele mencionar los cinco paros de alcance nacional que se dieron durante el año, pero al avanzar sobre las fuentes nos encontramos con un gran número de paros parciales y regionales poco conocidos. Este elemento nos da una pauta de la profundidad de la crisis política y económica, y del rol de la burguesía agraria para allanar el camino al golpe. Nos encontramos frente a una ofensiva de magnitudes pocas veces vistas de la burguesía contra un gobierno, que brota con más fuerza de los productores chicos y medianos que empujan a los grandes a la acción. Esto contradice otra imagen muy común, en donde se destaca un supuesto rol dirigente de SRA en el impulso al golpe y se borra la acción en el mismo sentido de la Federación Agraria.

Finalmente, se destaca la tendencia a la acción directa de los productores agrarios que no temen cortar rutas o atacar a los “carneros” para garantizar las medidas de fuerza. Se observa también el llamado permanente a asambleas de productores para garantizar el apoyo más amplio posible a las medidas. Así, métodos que un análisis simplista podría considerar como privativos de las clases explotadas, son utilizados también por la clase dominante cuando lo que está en juego lo demanda.